JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO

Bucaramanga, veintitrés de abril de dos mil veintiuno

Acorde con lo preceptuado en el artículo 14 del Decreto 806 de 2020 se procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la *parte demandante* contra la sentencia proferida por el **Juez Veintisiete Civil Municipal de Bucaramanga** el **19 de octubre de 2020**, al interior del proceso promovido por **Elsa Diomar Camargo** contra la **Compañía de Seguros de Vida Colpatria S.A. y/o AXA Colpatria Seguros de Vida S.A.**

En los términos del artículo 328 del C.G.P., la competencia se circunscribe únicamente a los reparos vertidos contra la sentencia apelada y la sustentación que se hizo al respecto.

De la competencia

La competencia para conocer del presente recurso de apelación radica en este despacho judicial, conforme a la regla prevista por el artículo 320 del C. G. P., al ser el superior funcional de los Juzgados municipales de este circuito y en razón a la cuantía del proceso que se encuentra dentro del rango de la menor cuantía establecido en el artículo 25 inciso tercero ibidem.

Antecedentes

Elsa Diomar Camargo afirma que suscribió la *Póliza N° 6038222* sin que se hubiera pagado el dividendo respectivo informado en la oferta comercial, por lo tanto deprecia se declare la existencia y validez del *contrato de seguros de vida reajutable con dividendo* donde la demandante es tomadora y asegurada respecto de la *Póliza N° 6038222*, vigente a partir del **25 de diciembre de 1996** hasta el **25 de diciembre de 2016**; se disponga el reconocimiento y pago de la suma de **\$86.692.458** por valor de dividendos junto con los intereses causados por valor de **\$25.905.151** entre el **1 de marzo de 2018** y el **28 febrero de 2019** y los que se causen hasta el pago total de lo ordenado, con la consecuente condena en costas procesales.

Trámite

Mediante auto del **27 de mayo de 2019** fue admitida la demanda¹ y reformada por auto del **13 de junio de 2019**², providencias que fueron notificadas al demandado el **11 de septiembre de 2019**³, quien aceptó la existencia del contrato de seguro, oponiéndose al pago del dividendo en la cuantía pedida, expuso las excepciones de mérito que denominó: *Inaplicabilidad de la UPAC en este asunto*: Indicando que es imposible realizar la liquidación del dividendo aplicando la UPAC comoquiera que la Ley 546 dispuso que todas las obligaciones expresadas con aquella unidad en adelante se expresarían en UVR; *Modificación de las condiciones contractuales en virtud de la Ley*: Fundamentada en que la *Póliza N° 6038222* de seguro individual plan vida porvenir se modificó por causas legales en lo referente a la moneda como referencia de ajuste, quedando consignado en la misma *“un plan de vida reajutable en unidad de valor real UVR”*; *Cotización no tiene fuerza vinculante*: Afirma que la cotización presentada a la demandante corresponde a una estimación con base en las posibles variaciones que podría llegar a tener la UPAC y no corresponde a la póliza o al contrato de seguros, siendo estos los únicos documentos con fuerza vinculante entre las partes y agregó que la cotización no se encuentra firmada por el asegurador conforme lo exige el artículo 1046 del C. Cio. vigente para el momento de la celebración del contrato y aplicable conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887; *Liquidación sobre el valor a pagar está conforme a Derecho*: Indicando que la liquidación efectuada por el demandado se encuentra conforme a lo pactado por las partes, de acuerdo a la variación legal aplicable al caso y conforme a los principios de legalidad y buena fe; *Prescripción*: Expuso que se aplica la prescripción ordinaria de dos años conforme al artículo 1081 del del C. Cio., indicando que si la asegurada presentaba desacuerdo con el cambio de UPAC a UVR debió manifestarlo cuando tuvo conocimiento de dicha circunstancia, agregó que transcurrieron mas de dos años desde el momento en que la demandante presentó la reclamación ante la aseguradora y la fecha de radicación de la demanda; *Objeción al juramento estimatorio*: Afirma que la suma de **\$112.597.609,00** no tiene fundamento legal ni contractual por cuanto no corresponde a las variaciones reales legales de la UPAC ni UVR, aunado a que la

¹ Archivo denominado “07AutoAdmisorio” del expediente digital de primera instancia

² Archivo denominado “09AceptaReforma” del expediente digital de primera instancia

³ Archivo denominado “15ActaNotificacionPersonalPoder” del expediente digital de primera instancia

demandante no presentó ningún dictamen que justifique la liquidación sobre la cual se realizó el juramento estimatorio.

De las excepciones de mérito formuladas por la parte demandada, así como de la objeción propuesta se corrió traslado el **22 de enero de 2020**⁴ y a través de apoderado judicial se pronunció oponiéndose a las excepciones y solicitando que se declararan imprósperas.⁵

En lo referente a la *objeción al juramento estimatorio* se presentó como prueba un dictamen pericial sobre la forma como se realizó la liquidación de dividendos y la hoja de vida del perito para efectos de acreditar su experticia e idoneidad.

Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del **19 de octubre de 2020** se condenó al pago de \$5.638.592,85 previa retención en la fuente, como dividendos, conforme a lo pactado en el *literal b* de la *cláusula quinta* del referido contrato y de \$22.719 como intereses moratorios causados entre el *1 de marzo de 2018* y el *28 de febrero de 2019* y los que sucesivamente se causen hasta el pago total de lo ordenado, exponiendo como fundamento de su decisión que las partes no debatieron la existencia del contrato de seguros y que las sumas pretendidas por la demandante con base en la cotización presentada por el asegurador se encuentran fuera de la literalidad de lo pactado en el contrato de seguros, el cual corresponde al único documento con fuerza vinculante para las partes.

Finalmente decidió imponer a la demandante multa de \$10.693.629,71 a favor del Consejo Superior de la Judicatura, en aplicación a lo dispuesto en el *artículo 206 del C.G.P.*, en razón a que la suma incluida en el juramento estimatorio excede en un 50% a la que resultó probada en curso del proceso.

Del Recurso de Apelación

La parte demandante apeló la sentencia, aseverando que debe admitirse la fuerza vinculante de la cotización presentada en la etapa pre negociada por cuanto establece los valores a pagar por parte del asegurador, incluido el valor del dividendo, arguyendo que como consecuencia de lo anterior, la suma que se ordenó al demandado a pagar a la demandante resulta irrisoria y no corresponde a la prometida por el asegurador y que motivó a suscribir el contrato de seguro.

Igualmente, indicó que la estimación de la cuantía se fundamentó en la cotización presentada por la aseguradora y dentro del término de traslado de la objeción aportó el dictamen pericial, el cual superaba excesivamente el valor juramentado en la demanda, de lo que se concluye que el actuar de la demandante no fue malintencionado o temerario y por el contrario se fundamentó en la suma prometida por el asegurador.

Durante el traslado de la sustentación a la apelación, la parte contraria se allanó a los argumentos vertidos como fundamento al desacuerdo con la decisión de primera instancia.

CONSIDERACIONES

Problema Jurídico

Con ocasión de la controversia suscitada, los problemas jurídicos a dilucidar se circunscriben a determinar *i)* si la cotización efectuada por el asegurador hace parte del contrato de seguro celebrado entre las partes; y, *ii)* si en el presente asunto es aplicable la sanción contenida en el artículo 206 del C.G.P. a la parte demandante.

Régimen normativo

Bajo el principio de la libertad en la estipulación contractual, si el convenio no contraviene la constitución política y las normas de orden público, se erige en ley para las partes según lo artículos 15, 16 y 1602 del Código Civil; de la misma manera, las estipulaciones acordadas informan en

⁴ Archivo denominado “18TrasladoObjecionJuramento” del expediente digital de primera instancia

⁵ Archivo denominado “19DescorreTraslado” del expediente digital de primera instancia

cada caso en particular las obligaciones y derechos frente a quienes conforman la relación jurídico –sustancial.

El contrato de seguro en los términos del artículo 1036 del Código de Comercio es consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, debe contener los mínimos requisitos enumerados en el artículo 1047 ibídem, pudiéndose acordar entre los contratantes condiciones particulares.

Concurren como partes del contrato de seguro el asegurador y el tomador, como lo prevé el artículo 1037 del código de comercio, en tanto que el tomador y asegurado pueden ser la misma persona y otro el beneficiario.

Para que nazca a la vida jurídica la obligación de la compañía de pagar el seguro, es necesario que se estructure el siniestro, que no es otra cosa que la realización del riesgo asegurado según lo dispone el artículo 1072 del código de comercio, de donde nacen para las partes una serie de obligaciones, siendo la principal para el asegurado o beneficiario, dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro por mandato del artículo 1075 ibídem, y para el asegurador pagar el siniestro dentro del término estipulado por la ley, artículo 1080 de esa misma legislación.

Caso concreto

1.1. Con certeza se sabe que entre **Elsa Diomar Camargo** en calidad de tomadora y la **Compañía de Seguros de Vida Colpatria S.A. y/o AXA Colpatria Seguros de Vida S.A.** en su calidad de aseguradora, suscribieron el *contrato de seguro de vida individual – plan vida porvenir, plan de seguro de vida reajutable en UPAC con o sin dividendos (plan múltiple)* expidiéndose la *Póliza N° 6038222* vigente a partir del 25 de diciembre de 1996 hasta el 25 de diciembre de 2016, obrante en los folios 2 al 9 del expediente físico de primera instancia⁶ así como en los folios 124 al 135⁷ del mismo, aspectos todos aceptados por las partes de este litigio.

1.2. En el anexo 4 del dictamen pericial obra el documento titulado *cotización plan vida porvenir*, claramente en ese documento se indicó que el porcentaje de incremento utilizado para el cálculo corresponde al **23.00% anual**, agregando que “... la cotización esta (sic) hecha bajo el supuesto de riesgos normales.”, “... cálculos realizados suponen el fallecimiento del asegurado ...” y que el valor asegurado alcanzado al final del periodo del plan es de \$1.256.412.430 y sobre ese monto se calcularon los dividendos.

En los términos de los artículos 1045, 1046, 1047 y 1048 del código de comercio, el contrato de seguro debe cumplir los requisitos especiales allí previstos para producir plenos efectos jurídicos; para que se considere como *vinculante una oferta*, ésta debe contener los **elementos esenciales del negocio ofrecido**, según lo pontifica el canon 845 ibídem, para el presente asunto son los referidos en el artículo 1045 de aquél estatuto.

La cotización bajo estudio nada dice sobre cuál es el *interés asegurable y el riesgo asegurable* regulado en los artículos 1054 y 1137 del código de comercio, luego, no es procedente derivar los efectos jurídicos de la oferta comercial frente a la referida cotización, por contravenir los supuestos de hecho del canon 845 de la legislación en cita.

Al efecto, claramente en la carátula de la **póliza 6038222** se dice que los amparos contratados son *cobertura básica de vida e incapacidad asimilada*, el valor asegurado inicial fue de \$20.000.000 reajutable en UPAC, el interés técnico se pactó en el 8%, **el porcentaje de la prima destinada al ahorro o dividendo es del 25%**, y el **dividendo** se acordó en el **6.9% del capital asegurado reajustado**, y conforme al clausulado del contrato, especialmente las identificadas con los números 1 y 5, se sabe que el *capital asegurado reajustado* implica tomar el valor del capital asegurado inicial y reajustarlo día a día en la misma proporción de variación de la UPAC, desde la expedición de la póliza y hasta y hasta cuando se cause el seguro, determinándose por tanto todos los elementos esenciales del contrato de seguro, que por lo demás tampoco ha sido desconocido por las partes en litigio.

⁶ Visible en el archivo denominado “01DemandaAnexosReparto” del expediente digital de primera instancia.

⁷ Visible en el archivo denominado “16ContestaDemanda” del expediente digital de primera instancia.

En ninguna parte del contrato de seguro se pactó un **incremento del 23.00% anual**, como se indica en la *cotización*, tampoco se *aseguró* un valor concreto final del **capital asegurado reajustado**, sino que se dejó a las variables financieras de la UPAC como se relaciona en las cláusulas 1, 5 y 15; tampoco, ni en la *cotización* ni en la póliza, la aseguradora se obligó a liquidar los dividendos sobre una suma cierta y determinada, al margen de la falta de vinculatoriedad de la oferta, claramente en la *cotización* se habla de una *proyección que tiene en cuenta un incremento del 23% anual del capital*, sin que de la liquidación efectuada por el perito, o mediante otro medio probatorio, se hubiera acreditado la causación del referido incremento que implicara tener por cumplidas las variables de la proyección pactadas, amén que en la póliza es ausente la obligación del asegurador de garantizar siempre el incremento del 23.00% anual de la *cotización*.

Consecuencialmente con lo anterior, los valores referidos por el perito en la columna 7 del anexo 3 donde se determinó un saldo de capital en pesos según la *cotización* de la UPAC para el 25 de diciembre de 2016 en la suma de **\$81.718.736,96**, en verdad observa el pacto del contrato de seguro, amén que el recurrente no ha censurado las conclusiones del perito en este aspecto, ni en ningún otro, que dicho sea de paso, el dictamen pericial tuvo acogida por la primera instancia, de donde también se sabe que finalmente los indicadores económicos de referencia no implicaron un *incremento anual del 23.00%*, como se ilustra en la columna 7 del referido informe pericial, por lo tanto **no** es procedente tener en cuenta el incremento reportado por el perito en la columna 8, pues se insiste, el mismo no fue pactado en el contrato de seguro y tampoco se verificó ese incremento bajo las condiciones financieras del contrato, errando en este puntual aspecto el perito, obligando a desechar las cuentas de la columna 9.

Por lo tanto, el valor del dividendo dispuesto en la sentencia recurrida se aviene tanto a lo pactado entre las partes como a lo concluido por el perito, excluido el error de cálculo antes advertido, luego, la suma correcta del capital asegurado reajustado corresponde a **\$81.718.736,98**, el cual al ser multiplicado por el **6.9%** señalado en la carátula de la póliza de seguros como el porcentaje del dividendo a aplicar, arrojaría una suma de **\$5.638.592,85** tal y como lo consideró la primera instancia.

La parte demandante, en quien recae la carga probatoria, tampoco probó que se hubiera desconocido por el demandado lo preceptuado en el artículo 863 del código de comercio, luego, en verdad, el valor por concepto del dividendo se aviene a lo pactado entre las partes ante la ausencia de efectos jurídicos vinculantes con la *cotización* antes referida.

1.3. El segundo reparo se enfila contra la sanción del canon 206 del C.G.P.; el inciso primero de la referida norma dispone que es procedente considerar la objeción cuando se “... *especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.*”.

En el acápite titulado *objeción al juramento estimatorio* el demandado nada indica sobre las fallas en las cuentas presentadas por el demandante que implicaran la existencia de una verdadera objeción al juramento estimatorio, no hace evidentes cuáles pueden ser los errores de cálculo, sin embargo, se acredita que la parte actora apoyó sus cuentas en un dictamen pericial, al margen de las valoraciones expuestas sobre el mismo, lo que sí demostraron las diligencias es la ausencia de una objeción real al juramento estimatorio; en tanto que tampoco es procedente predicar las consecuencias del párrafo de la norma bajo análisis, pues la ausencia de acreditación del monto global de las pretensiones no obedece a un actuar negligente o temerario de la parte actora, como también lo ha precisado la jurisprudencia constitucional en la sentencia C – 157/13, luego, se revocará el numeral quinto de la sentencia apelada.

1.4. Ante la prosperidad parcial de la alzada, no se condenará en costas por disposición del artículo 365 numeral 4 del C. G. P.

En mérito de lo expuesto, el *Juez Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga*, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Revocar el numeral quinto de la sentencia apelada, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: Confirmar en los demás aspectos la sentencia proferida el **19 de octubre de 2020** por el **Juez Veintisiete Civil Municipal de Bucaramanga**.

TERCERO: No condenar en costas y ejecutoriada la presente providencia, **devuélvase** el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:

**EDGARDO CAMACHO ALVAREZ
JUEZ**

**JUEZ - JUZGADO 006 DE CIRCUITO CIVIL DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-
SANTANDER**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

da93fdb1a9e36b3ce031e2537c2a1e2b91eec76d95c8dd7a99fc8d93d332e0d6

Documento generado en 23/04/2021 01:38:54 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**